

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política económica y social

En enero, el Gobierno griego preparó un paquete de medidas adicionales para acercar posturas con sus acreedores de cara al cierre de la segunda evaluación del memorándum. Inicia así 2017 con una avalancha de nuevos impuestos, con los que el Gobierno intenta cuadrar sus previsiones presupuestarias para alcanzar así los objetivos fijados en el tercer rescate, todo ello sin saber aun cuándo podrá cobrar el próximo tramo de la ayuda. Se trata de medidas que van desde la reducción del ingreso mínimo exento de impuestos, pasando por el aumento de los tipos del IRPF, hasta el incremento de una serie de impuestos indirectos, y la creación de nuevos. Con esta serie de incrementos de impuestos directos e indirectos, el Estado espera recaudar 2.447 millones de euros adicionales y el Gobierno espera poder alcanzar en 2017 un superávit primario superior al 1,75 % del producto interior bruto (PIB).

Además, espera sentar las bases para que en 2018 el superávit primario alcance el 3,5 % del PIB fijado como objetivo en el tercer rescate, firmado en verano de 2015. Según los expertos, sin embargo, el incremento de la imposición ya extremadamente alta puede afectar negativamente a las previsiones económicas del Gobierno para el año que empieza, de un 2,7 %.

Todo esto ocurre en un contexto de extrema incertidumbre, pues no solo se cuestiona el objetivo de crecimiento económico, sino que tampoco está claro cuándo podrá contar Grecia con el próximo tramo del rescate, por valor de 6.100 millones de euros.

Se recuerda que el Gobierno despidió el año 2016 pidiendo perdón a los acreedores por haber decidido sin previa consulta abonar una paga extraordinaria a los pensionistas más pobres y aplazar el incremento del IVA en las islas del mar Egeo golpeadas por la crisis de refugiados.

Tsipras lo había anunciado en un mensaje televisado, en un momento de elevada tensión entre los acreedores sobre la segunda revisión del programa asociado al rescate.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que todavía sigue sin decidir si se suma al tercer rescate, considera que los objetivos para el superávit primario de Grecia a medio plazo son demasiado ambiciosos (3,5 % del PIB a partir de 2018), los acreedores europeos lo ven factible.

El FMI considera que Grecia solo puede cumplir con un objetivo tan ambicioso si asume medidas de recorte e ingresos adicionales por algo más de 4.000 millones de euros, sobre todo mediante un nuevo tijeretazo a las pensiones.

Aunque Grecia comparte la visión del FMI de que el objetivo para el superávit primario (que excluye el pago de los intereses de la deuda) es demasiado elevado,

porque anula toda posibilidad de insuflar vida a la maltrecha economía, no está dispuesta a asumir aún más recortes, y ante la duda, prefiere dejar al Fondo fuera del rescate.

La carta de disculpas enviada por Tsakalotos al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tras el acto en solitario de Tsipras, en la que promete que las medidas aprobadas son excepcionales, ha permitido al menos volver a descongelar las medidas de alivio de la deuda acordadas a comienzos de diciembre. Dijsselbloem anunció que se daba por satisfecho con las explicaciones dadas por el ministro y que, por tanto, en enero el MEDE podrá analizar las medidas a corto plazo de alivio de la deuda griega.

Básicamente se trata de extender los vencimientos de bonos y dar algo más de margen al pago de los intereses correspondientes al segundo rescate. Las medidas a medio y largo plazo, en cambio, no se abordarán hasta pasado el verano de 2018, cuando finalice el rescate heleno.

Grecia y sus acreedores se hayan visto en un punto muerto de las negociaciones para concluir la segunda evaluación del rescate, la prensa helena especula con que el Ejecutivo quiere cerrarla antes del Eurogrupo previsto para el 20 y 21 de febrero. En las últimas semanas se ha puesto en entredicho la necesidad de la participación del FMI al lado de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en el memorándum, con declaraciones cruzadas entre Atenas y Berlín al respecto.

A finales de enero, el director gerente del MEDE, Klaus Regling, afirmó que «asume» que las instituciones no aprobarán el desembolso del próximo tramo del rescate griego a Atenas si el Fondo Monetario Internacional no acepta participar en el rescate». El FMI de momento, a pesar de las insistencias de los países miembros, no participa directamente en el rescate a Grecia, limitándose a proporcionar apoyo técnico a los acreedores europeos. Según rumores sobre el análisis realizado por el FMI, que presentará en febrero, esta Institución parecería considerar la deuda griega «altamente insostenible», una opinión que contrasta con la del MEDE, que considera que la carga «puede ser manejable».

Regling dijo que esas preocupaciones «no son nuevas» y que la posición del MEDE es «clara» en cuanto a continuar el programa con la participación del FMI, no porque necesiten su aportación financiera dado que el MEDE puede proporcionarla, sino porque ese fue el acuerdo entre las instituciones «y no hay razón para cambiarlo ahora».

Por otra parte afirmó que las autoridades griegas «también tienen que avanzar en varios aspectos en los que todas las instituciones han identificado que necesitan actuar». Regling descartó también la existencia de un «plan B», añadiendo que, por otra parte, probablemente no tengan que utilizarse la totalidad de los 86.000 millones de euros previstos en el tercer rescate, ya que tanto el crecimiento como el desempeño fiscal del país han sido «mejor de lo esperado» y la banca «probablemente necesitará 20.000 millones menos de lo previsto».

Entre las medidas adicionales que ha venido exigiendo el FMI para hacer factibles los objetivos fiscales a medio plazo, está la ampliación de la base imponible - reduciendo el mínimo exento- y nuevos recortes a las pensiones, algo que el Gobierno de Alexis Tsipras rechaza por ahora categóricamente.

El Eurogrupo de enero concluyó sin que se lograra acordar una fecha para el regreso de los representantes de las instituciones acreedoras. Atenas no logró el apoyo de los socios europeos a sus pretensiones de no legislar por adelantado medidas de ajuste para los años posteriores a 2018 (cuando ya habrá expirado el tercer rescate), como viene exigiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agencia de calificación crediticia Moody's considera que los continuos retrasos en la segunda evaluación del programa de asistencia financiera a Grecia amenazan con perjudicar la reestructuración de los bancos helenos. La agencia señala que estos retrasos ponen en peligro el objetivo de reducir hasta finales de 2019 en un 40 % los créditos en mora de la banca, que actualmente suman en torno al 45 % de todos los préstamos.

A juicio de la agencia, para "restaurar gradualmente la confianza de los depositantes e inversores en el país y su sistema bancario", es "crucial" que Grecia aplique con rapidez el programa acordado. Un punto esencial para que mejore la confianza de los depositantes y, por tanto, se establezca la situación de la banca es que se produzca el deseado regreso de los bonos griegos al programa de flexibilización cuantitativa del BCE, algo que, recuerda Moody's, solo podrá ocurrir si el Gobierno griego y las instituciones acreedoras logran cerrar la actual evaluación del programa de reformas.

La Oficina de Presupuestos del Parlamento griego, formada por un comité de expertos económicos independientes, teme que el retraso en las negociaciones entre Atenas y los acreedores pueda conducir a un cuarto rescate.

En su informe trimestral (octubre a diciembre) sobre la marcha de la economía publicado a finales de enero, este comité de "sabios" ofrece una imagen de las perspectivas económicas mucho más pesimista que la del Gobierno.

Según el comité de expertos, la previsión de un incremento del PIB del 2,7 % previsto en los presupuestos generales "es incierta" y "más un mensaje de optimismo que una estimación válida", ya que depende de muchos factores cíclicos y externos.

Un punto que, a su juicio, hace que la situación sea extremadamente incierta es el retraso que está habiendo en la actual negociación entre Grecia y sus acreedores sobre la segunda evaluación del tercer rescate.

El hecho de que no se vislumbre una rápida conclusión de las negociaciones lleva a que los expertos teman que la situación económica de Grecia pueda volver a agravarse abocando al país a un nuevo rescate.

Si el Gobierno no aplica con rapidez las medidas exigidas, deberá pedir nuevos créditos para hacer frente a sus necesidades de financiación en 2018. Esto, añade el comité de expertos, solo puede ocurrir por dos vías, o pidiendo préstamos en los mercados o bien a través de un crédito del MEDE, lo que parece el escenario más probable. Crédito que, por supuesto, iría vinculado a nuevas condiciones, ajustes, que previsiblemente serán muy severos habida cuenta de las reticencias que mostrarán los socios europeos a la hora de aprobar un nuevo rescate.

Los expertos advierten en fin que si Grecia no logra garantizar la refinanciación de su deuda, volverá a correr el riesgo de impago, quiebra y de una salida de la zona euro.

Sin embargo hay que recordar que el año recién concluido no ha sido negativo. Grecia superó su objetivo de superávit primario -antes de pago de la deuda- en 2.400 millones de euros, según un informe de datos provisionales presentado por el Ministerio de Finanzas. En total dicho superávit alcanzó los 4.392 millones de euros, muy superior 1.983 millones presupuestados.

Además el año pasado el Estado y las administraciones públicas griegas registraron un déficit de 1.185 millones de euros, muy por debajo de los 3.617 millones previstos. El resultado se debe, además de a un incremento importante de los ingresos públicos, a una gestión financiera muy austera que implicó una reducción importante del gasto y de las inversiones públicas.

El gasto total del Estado en 2016 alcanzó los 55.153 millones de euros, 817 millones menos que los 55.970 millones previstos en los presupuestos. Los ingresos ordinarios alcanzaron los 53.968 millones de euros, 1.616 millones más de los 52.352 millones previstos. Las inversiones públicas sumaron 6.288 millones de euros, 462 millones menos en comparación con los 6.750 millones presupuestados. La reducción de la financiación de inversiones públicas, en su mayoría en programas cofinanciados por la Unión Europea, tuvo como consecuencia una bajada sustancial de los ingresos provenientes de fondos europeos que sumaron 4.172 millones de euros, 204 millones menos de los 4.376 millones presupuestados.

Seguridad social

Grecia ha inaugurado con el comienzo del año un nuevo sistema de pensiones que fusiona las nueve cajas existentes hasta ahora e introduce cotizaciones uniformes para todos los trabajadores y autónomos.

La reforma, que constituía uno de los requisitos del tercer paquete de rescate del país, cosechó críticas de algunos sectores de las profesiones liberales así como los agricultores, pues las cotizaciones quedan establecidas en el 26,9 % de los ingresos, más de lo que pagaban hasta ahora.

La constitución de la Caja Única de Seguridad Social (EFKA) «es un paso importante para crear de nuevo un sistema de seguridad social público y moderno», destacó la ministra griega de Trabajo, Efi Ajtsioglou, en la presentación del nuevo sistema.

La ministra recalcó que EFKA ha sido elaborado en una coyuntura difícil, pues todas las cajas de pensiones estaban amenazadas de quiebra.

Según explicó el viceministro encargado de la Seguridad Social, Tassos Petrópulos, a partir del 16 de enero los asegurados podrán hacer todos los trámites a través de la página web de EFKA y no será necesario ir a las oficinas del nuevo organismo.

La nueva caja, que ofrece servicios a 4,2 millones de trabajadores y a 2,6 millones de jubilados, debe hacer frente a problemas serios.

Para el año en curso se prevé en Grecia un déficit de 1.100 millones de euros, que se suman a las deudas a la seguridad social por un total de 30.000 millones de euros, según el ministerio de Trabajo.

Además, decenas de miles de candidatos a la jubilación esperan por un periodo de más de un año para cobrar su pensión.

“Hasta el octubre de 2017 habremos solucionado el problema de los candidatos a la jubilación que esperan sus pensiones y, a partir de entonces, el periodo de espera se limitará a tres meses”, aseveró Ajtsioglu.

La mejora de los ingresos de EFKA es otro reto importante para el ministerio griego de Trabajo.

Ajtsioglu anunció que, para hacer frente al numeroso trabajo no declarado el cuerpo de los inspectores de Trabajo será fortalecido con mil empleados que hasta ahora trabajaban en las nueve cajas fusionadas.

El sistema de pensiones griego fue desde el primer rescate del país objeto de críticas por parte de los acreedores, a causa de su mal funcionamiento y su déficit enorme.

Al comienzo de la crisis, hace ocho años, existían en Grecia decenas de cajas de pensiones, con cotizaciones y reglas de jubilación muy desiguales, que en 2013 se fusionaron en nueve cajas, en lo que supuso el primer paso de la gran reforma.